

# El Consell se «alía» con el Gobierno y exige el trasvase del Júcar que perjudica a Alicante

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, nueva vicepresidenta de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, reitera que la toma en Azud de la Marquesa es la que debe consolidarse

F. J. BENITO | | 20.12.2015 | 04:57

Sostiene que la decisión es básica para plantear cualquier nueva transferencia de agua a las comarcas del Vinalopó.

Mas leña al fuego. La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, nueva vicepresidenta de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha decidido asumir la tesis del Gobierno central sobre el trasvase de agua del Júcar a la provincia de Alicante, y en su primera intervención ha dejado claro cual es la postura de la

Generalitat en el asunto. **No contempla otra toma del agua que no sea la del Azud de la Marquesa** que, según Cebrián, «debe consolidarse para plantear cualquier nueva transferencia hídrica entre ambas cuencas».

Así se lo planteó anteayer a la presidenta de la confederación, María Ángeles Ureña, justo el día en que se hacía público que **la Junta Central de Usuarios que preside Andrés Martínez había comunicado al Ministerio de Agricultura que dan por «aplazado» el protocolo firmado el pasado día 3 para la gestión del Júcar-Vinalopó, y que no aceptarán un convenio que no incluya la toma de Cortes de Pallás.**

Paradójicamente, la consellera Cebrián criticó las formas en las que se llevó a cabo la firma del protocolo, pero terminó aliándose con el Ministerio al exigir que se realicen las obras pendientes para que el agua del Azud de la Marquesa pueda llegar al Medio Vinalopó, donde hay agricultores que no tienen hechas ni las conducciones del postravase.

La apuesta del Consell está clara a la hora de elegir el modelo para que a la provincia llegue agua del Júcar. **El caudal sólo puede servir para riego** y los municipios deben asegurar su suministro con la desalada del mar, o con los recursos de acuíferos sobreexplotados donde algunos caudales se extraen a 500 metros de profundidad, con lo que Alicante y el propio Gobierno de España se enfrentan a dos problemas. Uno, que el Júcar-Vinalopó no cumple las condiciones por las que Bruselas dio la subvención de los 120 millones de euros (el trasvase debe servir para beber y para regar) y, en segundo lugar, que económicamente resulta imposible llevar agua potable entre Elda y Villena por el alto coste energético que supondría elevar el agua desalada.

A eso se añade, por otro lado, que continúa sin resolverse la conexión de la desaladora de Mutxamel con Benidorm, municipio que como el resto de la Marina Baixa quedaría descolgado del trasvase si al final no se articula la toma de Cortes de Pallás que reclama la Junta Central. Una junta donde en las últimas semanas también han surgido voces contrarias a la gestión de su directiva que, de momento, aguanta las presiones internas y las del Ministerio de Agricultura, una vez que **con Valencia no hay diálogo**. Seis meses han pasado desde la constitución del nuevo Consell y todavía no se ha producido ninguna reunión oficial.

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha dado marcha atrás esta semana y se ha negado a firmar con el Ministerio de Agricultura el convenio para la explotación del trasvase que condenaba el proyecto mientras en el mismo no figure que el agua para abastecimiento urbano llegue de Cortes de Pallás. Una posibilidad que, según sostienen su presidente, Andrés Martínez, y, entre otros, el Instituto Interuniversitario de Geografía y Asaja, **sólo es posible desde la toma de Cortes de Pallás,**



El Consell se «alía» con el Gobierno y exige el trasvase del Júcar que perjudica a Alicante

Fotos de la noticia

Los regantes dinamitan el trasvase Júcar-Vinalopó que quería imponer el Gobierno (17/12/2015)

El Gobierno fuerza a aceptar agua del Júcar imposible de beber (03/12/2015)

cuya finalización obliga a invertir 60 millones de euros. Usuarios y ministerios han formado un comisión técnica de trabajo para seguir negociando.

El protocolo que se ha quedado en nada y hay que volver a redactar había excluido, en la práctica, a todos los municipios de la Marina Baixa y a una zona de unas 300.000 personas en el Medio y Alto Vinalopó, donde no hay infraestructura para recibir agua desde la costa. Ese es ahora el argumento clave que sostienen los regantes para presionar al Ministerio de Agricultura.